

MINUTA LEY MARCO DE MEDIDAS DE PROBIIDAD, TRANSPARENCIA Y CONTROL EN MATERIA DE SUBVENCIONES

ANTECEDENTES. El fomento de actividades por parte de particulares, que es una de las funciones administrativas más importantes del Estado, se realizada más típicamente a través de las subvenciones. Sin embargo, la normativa es más bien escasa, con desarrollos esporádicos en ciertas áreas. Así, por ejemplo, la ley N° 20.248, que establece ley de subvención escolar preferencial, y la ley N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados del sistema de atención a la niñez y adolescencia, con sus respectivos reglamentos, son ejemplos de normativas completas que se hacen cargo de todas las etapas del procedimiento de subvención.

Sin embargo, las leyes puestas como ejemplo en el párrafo precedente son una excepción, existiendo otros casos en que la principal regulación a nivel legal es la Ley de Presupuestos y el Decreto Ley N° 1263, de 1975, del Ministerio De Hacienda, decreto ley orgánico de administración financiera del Estado.

Pero no sólo la ausencia de una normativa general sobre subvenciones requiere que se llene esta laguna.

Los casos públicos de los últimos años que han involucrado la transferencia de fondos desde municipalidades, gobernaciones y organismos de la Administración Central a particulares para que desarrollen una labor con fin público y que han terminado en un claro perjuicio para el erario fiscal y, peor aún, para precisamente aquellas personas que, muchas veces en situación de vulnerabilidad, son los beneficiarios últimos de las actividades y proyectos subvencionados, nos llevan a plantear la necesidad imperiosa de contar con normativa que regule, para todos los organismos de la Administración del Estado las medidas básicas de probidad, transparencia y control que se deben adoptar para evitar futuros hechos como los acontecidos.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY. La moción que se presenta consta de 15 artículos. Los primeros tres artículos se ocupan de definiciones generales, mientras que los siguientes contemplan las siguientes medidas dirigidas a solucionar gran parte de los problemas que se han detectado por parte de la Contraloría General de la República, la prensa y, también, las mismas Gobernaciones Regionales:

- 1) Plan estratégico de subvenciones obligatorio por cada organismo que articule correctamente las actividades subvencionadas y el fin público que se busca alcanzar.
- 2) Requisitos estrictos para ser considerado destinatario de subvenciones.
- 3) Requisitos de contenidos obligatorios para los actos administrativos de otorgamiento de una subvención: cómo se fiscalizará, el calendario de transferencias (justificando casos que no sean proporcionales al avance de la actividad subvencionada), constancia de aprobación por las unidades u órganos internos de fiscalización y control (como los Consejos Regionales y los Concejos

Municipales) y las causales que ameritan exigir la devolución inmediata de los fondos no aplicados a la actividad subvencionada.

4) Obligaciones de transparencia, información oportuna, cooperación con la fiscalización y, un tema que hoy no se encuentra tratado en ninguna normativa, la reinversión de los rendimientos financieros de los fondos entregados en la misma actividad subvencionada.

5) Requisitos comunes para las subvenciones que se entregan previo concurso público y acotamiento de las causales que permiten la asignación directa sin concurrencia.

6) La creación de una Base de Datos Nacional de Subvenciones, a cargo de la Contraloría General de la República, que permita cruzar información de diferentes entidades y detectar anomalías para mejorar la fiscalización del órgano contralor.

7) Límites a la subcontratación de las actividades subvencionadas, para que los fondos públicos vayan directamente a quienes cumplen el fin público y no se cree un mercado de intermediarios.

8) Reglas claras de rendición de cuentas y reintegro de fondos, que no sólo establezca plazos para efectuar ambas cosas, sino que entregue los mecanismos para llevar a cabo los cobros efectivos de aquellos fondos no invertidos u objetados en la rendición.

TEMA: RECURSOS HIDRICOS

“EL DERECHO AL ACCESO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO”

I. Normas sobre el agua en la Propuesta Constitucional

Artículo 16 N° 30: “La Constitución asegura a todas las personas: 30. El derecho al acceso al agua y al saneamiento, de conformidad con la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, es deber del Estado promover la seguridad hídrica, acorde a criterios de sustentabilidad. La legislación, regulación y gestión deberán incorporar todas las funciones de las aguas, priorizando el consumo humano y su uso doméstico de subsistencia”.

Artículo 16 N° 35 letra i: “La Constitución asegura a todas las personas:

35. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

i) Las aguas, en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la Nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de estas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad con la ley”.

Disposición Transitoria Duodécima: “Los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, reconocidos o regularizados conforme a la ley se regirán por las normas legales vigentes al tiempo de promulgarse esta Constitución”.

II. Análisis

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce "el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos"¹. Pese a existir un consenso internacional, doctrinal, legislativo y jurisprudencial amplio sobre la denominación “derecho humano al agua y el saneamiento”, la propuesta constitucional solo reconoce el “derecho al acceso al

1

[https://www.ohchr.org/es/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation#:~:text=El%2028%20de%20julio%20de,RES%2F64%2F292\).](https://www.ohchr.org/es/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation#:~:text=El%2028%20de%20julio%20de,RES%2F64%2F292).)

agua”, desestimando el texto de la Comisión de Expertos que consagraba “El derecho al agua y al saneamiento”.

El texto, a propósito del derecho de propiedad, señala que podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de aguas, los que confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos, en conformidad a la ley.

Esta redacción fortalece el derecho de propiedad sobre el derecho real de aprovechamiento (uso y goce) y constitucionaliza la facultad de disposición y la posibilidad de transmitir y transferir derechos de agua, mediante compraventas, lo que mantendría el negocio que se ha formado en torno al agua, no obstante, de que su entrega para aprovechamiento por parte del Estado es a título gratuito.

Otro problema será al que se enfrente la justicia chilena que ante conflictos entre el derecho de propiedad y el derecho al acceso al agua deberá ponderarlos y determinar cuál prevalece por sobre el otro.

Este tratamiento al recurso hídrico resulta sumamente preocupante, especialmente para esta región considerando la mega sequía de Chile Central que ya lleva 13 años, convirtiéndose en la más larga en 1.000 años, agravando una tendencia a la desecación, y situando a Chile a la cabeza de la crisis hídrica de la región (Organización Meteorológica Mundial, 2022).

III. Datos

Según el World Resources Institute²

1. Chile dentro de los 30 con mayor riesgo hídrico en el mundo al año 2025.
2. Actualmente la región del Maule presenta:
 - Un riesgo general del agua, Alto.
 - Estrés hídrico, sobre el 80%, Extremadamente Alto.
 - Agotamiento del agua, sobre el 75%, Extremadamente Alto.
3. Proyección al 2030:
 - Estrés hídrico proyectado, sobre el 80%, Extremadamente Alto.
 - Agotamiento proyectado del agua, sobre el 75%, Extremadamente Alto.

²

https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/#/?advanced=false&basemap=hydro&geoStore=68fba75f57dc2636818ed878269ec1f0&indicator=cfr_cat&lat=-40.04443758460857&lng=-137.10937500000003&mapMode=analysis&month=1&opacity=0.5&ponderation=DEF&predefined=false&projection=absolute&scenario=business_as_usual&scope=baseline&timeScale=annual&year=baseline&zoom=2

Dirección General de Aguas (DGA)

1. El 47,7% de la población chilena vive hoy bajo condiciones de escasez hídrica.
2. 16 decretos de Escases Hídrica para la región del Maule desde el año 2011 a la fecha.
3. El ultimo decreto N° 174, del 14 de octubre de 2022 al 14 de octubre de 2023, que afectó a toda la provincia de Curicó.

TEMA: SEGURIDAD PÚBLICA

Introducción:

La seguridad es un aspecto fundamental para el funcionamiento de un Estado de derecho y el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, creemos que la propuesta de la nueva Constitución presenta serias deficiencias en este ámbito que impiden poder apoyar la iniciativa.

La nueva propuesta de Constitución no parece introducir cambios significativos que aborden de manera efectiva los problemas actuales de seguridad en el país. A pesar de la necesidad de reformas y mejoras en este campo, la propuesta no ofrece una visión clara ni un enfoque innovador para abordar los desafíos de seguridad que enfrentamos.

Por ejemplo, la propuesta no aborda estrategias modernas de prevención del crimen, como la inversión en programas sociales y educativos en comunidades vulnerables, que han demostrado ser efectivas en otros países. Además, no se propone un marco para la colaboración entre la seguridad pública y el sector privado en áreas como la vigilancia urbana, que podría ser vital para abordar de manera eficiente el crimen en zonas urbanas.

Pero para ir más en detalle creemos que la propuesta constitucional presenta al menos los siguientes puntos críticos:

I. Ineficiencia y Rigidez Burocrática:

Uno de los aspectos preocupantes de la propuesta constitucional es la creación de nuevas instituciones sin un claro mandato operativo, lo que podría generar más burocracia sin necesariamente traducirse en una mejora en la eficiencia o eficacia en el manejo de la seguridad. Esto se evidencia en los Artículos 177 y 189, que detallan la organización del Ministerio Público, incluyendo una Fiscalía Nacional, Fiscalías Supraterritoriales, fiscales regionales y fiscales locales, así como la existencia de un Consejo de Coordinación Interinstitucional y un Consejo General del Ministerio Público.

Por ejemplo, el análisis del Artículo 186³, que establece la creación de un **Consejo de Coordinación Interinstitucional** presidido por el Fiscal Nacional en Chile, revela varios puntos débiles que me impiden suscribir la propuesta:

³ **Artículo 186** 1. Existirá un Consejo de Coordinación Interinstitucional presidido por el Fiscal Nacional, cuya función será asesorar y colaborar con el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 139 2. Estará integrado por: a) El Ministro a cargo de la seguridad pública o quien este designe. b) El Ministro a cargo de las relaciones con el Poder Judicial o quien este designe. c) El Ministro encargado de promover las políticas públicas relacionadas con la mujer o quien este designe. d) El General Director de Carabineros de Chile. e) El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. f) El Director Nacional de Gendarmería de Chile. g) El Director del servicio encargado de la aplicación y fiscalización de los impuestos internos. h)

1. Concentración de Poder en el Fiscal Nacional: El hecho de que el Fiscal Nacional presida el Consejo podría plantear preocupaciones sobre la concentración de poder. Esto podría afectar la independencia y objetividad del Consejo, ya que las decisiones podrían estar influenciadas por las prioridades o perspectivas del Fiscal Nacional.

2. Posible Conflicto de Intereses: La integración de varios ministros y directores de fuerzas de seguridad y otras entidades gubernamentales podría crear conflictos de interés. Estos miembros podrían tener agendas políticas o institucionales que no necesariamente se alineen con los objetivos imparciales de justicia del Ministerio Público.

3. Influencia Política y Gubernamental: La participación de altos funcionarios gubernamentales en el Consejo podría llevar a una influencia indebida del ejecutivo o de otras ramas del gobierno en las operaciones del Ministerio Público. Esto podría socavar la independencia judicial y la separación de poderes.

4. Ambigüedad en la Definición de Roles y Responsabilidades: El artículo menciona que el Consejo asesorará y colaborará con el Ministerio Público, pero no especifica detalladamente las funciones o límites de esta colaboración. Esta ambigüedad podría llevar a superposiciones de roles o a la usurpación de funciones que deberían ser exclusivas del Ministerio Público.

Por otra parte, incluir la **Fiscalía Supraterritorial** en la Constitución es un asunto de debate. La Fiscalía Supraterritorial, definida como una entidad con competencia nacional encargada de los delitos de crimen organizado y alta complejidad (Art. 183⁴), representa un compromiso claro del Estado con la lucha contra estos crímenes, proporcionando una base estable y duradera para su operación. Por otro lado, podría argumentarse que detalles tan específicos de la administración de justicia podrían ser más adecuadamente manejados a nivel legislativo, lo que

Un representante del organismo a cargo de la función de la policía marítima. i) Un representante del organismo a cargo de la prevención del lavado de activos provenientes del crimen organizado. 3. La ley institucional establecerá su funcionamiento y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

⁴ Artículo 183 1. Existirá una Fiscalía Supraterritorial, con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. La organización de la Fiscalía Supraterritorial y los delitos que esta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, de acuerdo con la ley institucional, habiendo oído previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional. 2. En el ejercicio de sus atribuciones, la Fiscalía Supraterritorial deberá actuar de manera coordinada con las fiscalías regionales. Las contiendas de competencia que se susciten entre estas últimas y la Fiscalía Supraterritorial serán resueltas por el Fiscal Nacional. 3. Estará a cargo de un Fiscal Supraterritorial que durará ocho años en el ejercicio de sus funciones y una vez cesado en su cargo no podrá ser designado por un nuevo período, lo que no obsta a que pueda ser nombrado en otro cargo del Ministerio Público.¹³⁸ 4. La designación e inhabilidades del Fiscal Supraterritorial se regirán por las reglas establecidas para los fiscales regionales. Con todo, permanecerá en el cargo mientras cuente con la confianza del Fiscal Nacional, salvo lo expresamente exceptuado por la Constitución y la ley.

proporcionaría mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad y del sistema de justicia.

1. Estructura Institucional Fija: Al definir la existencia y el marco general de la Fiscalía Supraterritorial en la Constitución (Art. 183), se limita la flexibilidad legislativa para modificar su estructura o abolirla sin una enmienda constitucional.

2. Ámbito de Competencia Predefinido: La Constitución establece las áreas de competencia de la Fiscalía Supraterritorial (Art. 183), limitando la capacidad de la ley para expandir o reducir su alcance sin una reforma constitucional.

3. Designación y Duración del Mandato: La Constitución establece cómo se designa al Fiscal Supraterritorial y la duración de su mandato (Art. 183), restringiendo la capacidad de la ley para alterar estos aspectos.

II. Ambigüedad Normativa:

Otra deficiencia importante en la propuesta constitucional es la ambigüedad en la definición de las competencias y responsabilidades de las nuevas instituciones de seguridad. Esta ambigüedad podría generar conflictos de jurisdicción y una aplicación ineficaz de la ley.

Un ejemplo de esta ambigüedad normativa es lo que se ha denominado la **"narco constitución"**. La potestad reglamentaria del ejecutivo es esencial para detallar y aplicar efectivamente las leyes aprobadas por el legislativo, como en el caso de la Ley 20.000, que regula el microtráfico de estupefacientes y psicotrópicos. El reglamento⁵ de esta Ley incluye un catálogo detallado de sustancias prohibidas, crucial para la clasificación precisa de estupefacientes y psicotrópicos regulados, y juega un papel fundamental en la aplicación práctica de la ley al establecer claramente qué sustancias están sujetas a control y penalización.

Sin embargo, la limitación de las facultades reglamentarias del ejecutivo (Artículos 16 N° 8 letra a y 16 N° 9 letra b.)⁶ en la nueva Constitución podría mermar seriamente la capacidad del gobierno para actualizar o modificar reglamentos clave como el de la Ley 20.000. Esta limitación reduciría la eficiencia y flexibilidad en la

⁵ Reglamento Ley 20.000 en <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=269323>

⁶ **Art 16:** Todas las personas tienen derecho a: 8. Garantías penales mínimas: a) Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. 9. El derecho a un trato digno y servicial por parte de los órganos de la Administración del Estado, así como de sus autoridades y funcionarios. Estos facilitarán a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. b) Las competencias sancionadoras administrativas solo se ejercen a través de un proceso previo, racional y justo, legalmente tramitado, por conductas determinadas en su núcleo esencial por la ley, y cuya comisión haya sido evitable para el supuesto infractor. Las sanciones administrativas están sujetas a los principios de legalidad, irretroactividad en perjuicio, proporcionalidad y necesidad.

respuesta del Estado ante el dinámico escenario del narcotráfico y del microtráfico, disminuyendo la efectividad de la ley en la práctica.

La ambigüedad normativa de la propuesta constitucional no se limita al ámbito de la seguridad y el narcotráfico, sino que también se extiende a otras áreas críticas que podrían verse afectadas por los Artículos 16 N° 8 letra a y 16 N° 9 letra b.

- En el área de regulación tecnológica y digital, la necesidad de una descripción precisa y expresa de las conductas sancionables podría retrasar la implementación de leyes que aborden nuevas formas de ciberdelito utilizando tecnología emergente. Esto deja una brecha temporal en la seguridad cibernética y podría tener graves consecuencias en un mundo cada vez más digitalizado.

- En el ámbito de la gestión ambiental, la exigencia de un proceso previo, racional y justo para todas las sanciones administrativas podría retrasar la implementación de medidas urgentes en respuesta a desastres ambientales repentinos. Esto limitaría la capacidad de respuesta rápida del Estado ante emergencias ambientales, poniendo en riesgo la protección del medio ambiente y la salud de la población.

- En el área de salud pública, la necesidad de una legislación detallada y procesos justos para la imposición de medidas restrictivas podría complicar la respuesta rápida y eficaz del sistema de salud ante situaciones de emergencia, como la aparición de nuevos virus con características únicas. El ejecutivo se vería limitado y ralentizado para establecer (o levantar) medidas urgentes como cuarentenas, restricciones de viaje o mandatos de vacunación. La burocracia adicional podría ser perjudicial en situaciones donde se requiere una acción inmediata para contener la propagación de enfermedades.

Estos ejemplos demuestran cómo las restricciones en la flexibilidad legislativa y en la capacidad de imponer sanciones administrativas pueden afectar negativamente la capacidad del Estado para responder de manera ágil y efectiva a situaciones cambiantes y emergentes en diversas áreas críticas.

III. Insuficiencia en la Protección de Derechos Humanos en la Gestión de Seguridad Pública

Aunque la propuesta constitucional enfatiza la paz social y el uso de métodos pacíficos (Artículo 9), la falta de especificidad sobre cómo se garantizarán los derechos humanos en la implementación de estrategias de seguridad es una omisión significativa. Desde una perspectiva de izquierda, es esencial que la Constitución establezca claramente cómo se protegerán los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad, evitando así prácticas abusivas y garantizando la protección integral de los ciudadanos, especialmente de grupos vulnerables.

Por ejemplo, la gestión de las protestas sociales, como las vividas en Chile desde octubre de 2019, es un claro ejemplo. La ambigüedad en la definición de estrategias de seguridad puede llevar a una respuesta desproporcionada por parte de las

fuerzas de seguridad, resultando en violaciones de los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. Una constitución que no especifica cómo se protegerán los derechos humanos en estas situaciones puede perpetuar tales prácticas.

IV. Riesgo de Criminalización y Estigmatización en la Lucha Contra el Terrorismo

La definición vaga y la dependencia de legislación futura para especificar qué constituye terrorismo (Artículo 15) pueden llevar a una criminalización excesiva y a la estigmatización de movimientos sociales y políticos. Desde una perspectiva de izquierda, es crucial que la lucha contra el terrorismo no se convierta en un instrumento para reprimir la disidencia política o social, y que se mantengan claros límites para evitar abusos y la violación de derechos fundamentales.

Por ejemplo, la aplicación de leyes antiterroristas en el contexto del conflicto en La Araucanía con la población mapuche. Ha habido casos donde la aplicación de la ley antiterrorista ha sido cuestionada, percibida como una herramienta para criminalizar la protesta social y los reclamos territoriales de los pueblos indígenas. Una definición vaga de "terrorismo" en la Constitución podría agravar este problema.

Propuestas:

Para concluir, me gustaría ofrecer algunas recomendaciones que creo debió haber tenido la propuesta de Constitución en relación con la seguridad:

1. Clarificación de Roles y Competencias: Es crucial definir claramente los roles, competencias y mecanismos de coordinación entre las diversas instituciones de seguridad. Esto ayudará a evitar conflictos de jurisdicción y a promover una respuesta más eficaz a los desafíos de seguridad.

2. Protección de los Derechos Humanos: En el marco de la propuesta constitucional, es fundamental incorporar normas constitucionales que garanticen la protección integral de los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad y en la gestión de protestas sociales. Estas normas deben establecer principios de proporcionalidad, legalidad y respeto por los derechos fundamentales, prohibir prácticas abusivas y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Además, deben promover la capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad y establecer mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Esto asegurará que Chile cuente con un marco sólido que proteja los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente de grupos vulnerables, y promueva la justicia y la transparencia en todas las circunstancias.

3.- Deconstitucionalizar las definiciones sobre terrorismo: En lugar de incorporar esta definición en la Constitución, sugerimos que se trate la cuestión del terrorismo a través de legislación ordinaria, permitiendo así un debate y una revisión más detenida por parte del poder legislativo y la sociedad civil. Esto garantizará que los

límites se mantengan claros, se respeten los derechos fundamentales y se evite la estigmatización de movimientos sociales y políticos, particularmente en contextos sensibles como el conflicto en La Araucanía con la población mapuche. Esta medida promoverá la transparencia y la justicia en la lucha contra el terrorismo, garantizando al mismo tiempo el respeto por los derechos humanos y la protección de la protesta social legítima.

ANEXO: Descripción de Normas de la Propuesta Constitucional

Artículos Relacionados con Seguridad Pública y Delincuencia

- Artículo 9: Deber del Estado de resguardar la seguridad y promover la paz social, suponiendo el uso de métodos pacíficos de acción política.
- Artículo 15: Trata sobre el terrorismo y establece que una ley de quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad, con restricciones a los responsables de delitos de terrorismo.
- Artículo 20: Declara el derecho a vivir en un entorno seguro y establece el deber del Estado de garantizar protección efectiva contra la delincuencia, especialmente el terrorismo y la violencia criminal organizada.

Artículos Relacionados con Persecución Penal y Ministerio Público

- Artículo 177: Establece al Ministerio Público como un organismo autónomo encargado de dirigir la persecución penal de los delitos y la interposición de acciones para obtener la reparación del daño causado.
- Artículos 178 y 179: Detallan la organización del Ministerio Público, incluyendo una Fiscalía Nacional, Fiscalías Supraterritoriales, fiscales regionales y locales, además de consejos de coordinación.
- Artículos 180 y 181: Establecen restricciones para postular a cargos dentro del Ministerio Público y describen la estructura jerárquica, con el Fiscal Nacional como autoridad superior.
- Disposiciones Adicionales: Incluyen disposiciones como la obligación del Presidente de enviar proyectos de ley para adecuar la legislación antiterrorista a estándares de derechos humanos.
- Funciones del Ministerio Público: Detalla que el Ministerio Público ejerce la investigación de los hechos constitutivos de delito, adoptando medidas para proteger a las víctimas y testigos.

- Fiscalía Supraterritorial: Menciona la existencia de una Fiscalía Supraterritorial con competencia en delitos de crimen organizado y alta complejidad, cuya organización y delitos serán determinados por el Fiscal Nacional.
- Acción Penal y Orden a Fuerzas de Seguridad: Establece que el Ministerio Público puede impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública durante investigaciones.

Artículos Relacionados con Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

- Artículo 117: Establece a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile como las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, su dependencia directa del ministerio a cargo de la Seguridad Pública, y sus funciones principales.
- Artículo 118: Se refiere a la incorporación a las plantas y dotaciones de Carabineros y la Policía de Investigaciones, permitiéndola a través de sus propias escuelas, con excepciones.
- Artículo 119: Describe las funciones específicas de Carabineros y la Policía de Investigaciones, destacando sus enfoques y competencias.
- Artículo 120: Detalla el proceso de designación y los periodos de duración en el cargo para el General Director de Carabineros y el Director General de la Policía de Investigaciones.
- Artículo 121: Se refiere a Gendarmería de Chile, definiendo su finalidad y dependencia en la atención, vigilancia y reinserción social de personas detenidas o privadas de libertad.
- Artículo 122: Afirma el monopolio del Estado en el uso de la fuerza, que se ejerce a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, conforme a la Constitución y las leyes.
- Artículo 124: Indica que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deben colaborar con las municipalidades en funciones de prevención y seguridad ciudadana a nivel comunal.
- Artículo 125: Establece que estas fuerzas están sujetas a controles de probidad y transparencia dispuestos en la Constitución y las leyes, y al control y fiscalización de la Contraloría General de la República.

TEMA: INMIGRACIÓN

Nos reunimos hoy para debatir uno de los aspectos más críticos y determinantes de nuestra era: la nueva propuesta constitucional de Chile, especialmente en lo que respecta a la política migratoria. Sin embargo, me veo en la obligación de adoptar una postura crítica ante esta propuesta, analizando profundamente sus implicaciones y consecuencias. Mi objetivo es claro: ilustrar por qué, en su estado actual, esta propuesta no cumple con los estándares necesarios y por qué deberíamos considerar votar en contra en el plebiscito del 17 de diciembre.

En relación a Nacionalidad y Ciudadanía, en el **Artículo 17**⁷, sobre las bases para la adquisición de la nacionalidad chilena no propone nada nuevo, aunque aplaudo la mantención de principios de ius soli y ius sanguinis, ofreciendo un espectro amplio para obtener la ciudadanía chilena. La nacionalidad no solo es un asunto de nacimiento o descendencia, sino también de protección además de conexión y contribución a la comunidad.

Respecto a Residencia y Ciudadanía para Extranjeros, lo establecido en el **Artículo 21**⁸ respecto tiempo necesario para que personas evencidades puedan optar a la nacionalidad chilena se presenta como una medida que no ofrece novedad alguna respecto a la Constitución actual.

Respecto a lo que se propone en el artículo sobre Garantía de la Libertad Personal y Seguridad Individual - **Artículo 16, N° 4, letra b**⁹- donde se establece la norma de

⁷ **Artículo 17. 1.** Son chilenos: **a)** Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena. **b)** Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los literales a), c) o d). **c)** Los que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad con la ley. **d)** Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. **2.** La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. **3.** Con todo, los nacidos según la situación excepcional del literal a) del inciso 1 serán siempre chilenos cuando, por efectos de lo dispuesto en dicha norma, devienen en apátridas.

⁸ **Artículo 21. 1.** Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, que posean residencia definitiva vigente y que cumplan con los requisitos que esta Constitución establece, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. **2.** Los nacionalizados en conformidad con el literal c) del artículo 17 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización.

⁹ **Artículo 16:** La constitución asegura a todas las personas: **4.** El derecho a la libertad personal y seguridad individual. En consecuencia: **b)** La ley regulará el ingreso, estadía, residencia y egreso de extranjeros del territorio nacional. Todos los procedimientos y medidas regulados por dicha ley deberán llevarse a cabo con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile. La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos

expulsión “en el más breve plazo posible”, me gustaría detenerme, ya que por una parte protege la libertad personal y la seguridad individual de todas las personas, incluyendo migrantes. Sin embargo, la regulación del ingreso, estadía y egreso de extranjeros requiere de una mayor clarificación. Debe asegurarse de que todos los procedimientos respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales, evitando cualquier forma de discriminación o tratamiento injusto.

Además la propuesta de nueva constitución establece en su disposición **Trigésima sexta Transitoria**¹⁰, que dentro de un período de cinco años a partir de la eventual entrada en vigencia de la Constitución, el Presidente de la República debe presentar un proyecto de ley que dará origen a la creación de una Policía Fronteriza. Esta Policía Fronteriza será responsable de llevar a cabo el control, patrullaje y protección de las fronteras terrestres del país, siguiendo las pautas y regulaciones que determine la ley institucional.

A continuación me gustaría contarles porque pienso que estas normas tienen serias deficiencias técnicas, lo que da aún más argumentos a mi posición En Contra de este texto:

La propuesta constitucional contempla la expulsión de extranjeros bajo ciertas circunstancias, y la creación de una Policía Fronteriza. Estas medidas, aunque buscan garantizar, a mi juicio de un modo populista, la seguridad y el orden, podrían fácilmente traspasar la línea hacia la violación de los derechos humanos. La expulsión inmediata, sin un debido proceso que considere cada caso individualmente, especialmente para quienes buscan asilo o huyen de la violencia, es inaceptable. Además, la implementación de una Policía Fronteriza requiere de un marco claro que garantice el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones.

La norma de la propuesta, enfocada en la gestión de la migración y la expulsión de extranjeros (Art 16 N°4, letra b), presenta desafíos clave que requieren atención

extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad con la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Con todo, no se aplicarán las disposiciones del párrafo precedente en los casos de refugio, asilo o protección, expresamente contemplados en la ley, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona, institución o grupo que organice, financie o ejecute, con ánimo de lucro, el ingreso ilegal de personas al territorio de la República incurrirá en las sanciones que determine la ley.

¹⁰ **Trigésima sexta Transitoria.** Dentro del término de cinco años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República deberá ingresar un proyecto de ley que creará una Policía Fronteriza que será encargada del control, patrullaje y resguardo de las fronteras terrestres nacionales en la forma que determine la ley institucional. Dicha policía se coordinará con los organismos públicos relacionados al control fronterizo para el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de las facultades de la Fuerza Aérea y de la Autoridad Marítima, respecto de la frontera aérea y marítima.

crítica. Primero, la disposición de expulsar extranjeros "en el menor tiempo posible" plantea un riesgo significativo de vulnerar el debido proceso, especialmente en casos complejos como solicitudes de asilo. Además, la redacción del artículo es vaga respecto a los procedimientos específicos y condiciones para la expulsión, lo que podría resultar en aplicaciones inconsistentes y violaciones de derechos humanos. La propuesta de que extranjeros condenados cumplan penas en sus países de origen también presenta desafíos prácticos y diplomáticos, con posibles implicaciones en los derechos humanos. Estos aspectos subrayan la necesidad de una revisión cuidadosa para asegurar que la legislación sea justa, efectiva y respetuosa de los derechos y garantías fundamentales, así como de los compromisos internacionales de Chile.

La expulsión de extranjeros bajo las hipótesis presentadas en la nueva constitución chilena, como dije, enfrenta varias dificultades prácticas. En primer lugar, la expulsión rápida de aquellos que ingresan de forma clandestina o por pasos no habilitados puede entrar en conflicto con el debido proceso y el análisis individualizado de cada caso, especialmente en situaciones de asilo o refugio. Segundo, la expulsión de extranjeros que han cometido delitos en Chile y han cumplido penas plantea desafíos de coordinación con los países de origen, costos logísticos, y consideraciones de derechos humanos, especialmente si las condiciones de detención en los países de origen no cumplen con los estándares internacionales. Además, estas medidas pueden afectar negativamente la integración familiar y social de los migrantes que ya han establecido vínculos en Chile. En resumen, la implementación de las políticas de expulsión requiere un equilibrio delicado entre la seguridad nacional, el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales que evidentemente no se logra con la redacción propuesta.

Por otra parte, la propuesta para establecer una Policía Fronteriza en la disposición Trigésima Sexta Transitoria, enfrenta desafíos jurídicos y prácticos significativos. El mandato constitucional establece un plazo de cinco años para desarrollar un proyecto de ley, ofreciendo tiempo para la planificación pero posiblemente retrasando la atención a necesidades urgentes de seguridad fronteriza. La norma es vaga en la definición de funciones específicas de esta nueva policía, lo que podría conducir a interpretaciones conflictivas. La coordinación con otros organismos no está claramente definida, lo que podría resultar en ineficiencias o duplicación de esfuerzos, particularmente con Carabineros. Además, la creación de una nueva entidad policial implica retos significativos en términos de recursos humanos y financieros que no han sido considerados en la discusión y redacción. Además, la legislación secundaria tendrá un amplio margen para definir la estructura y funcionamiento de la Policía Fronteriza, pero esto también implica el riesgo de no reflejar adecuadamente los principios constitucionales y garantías. Finalmente, la norma carece de detalles específicos y no asegura el alineamiento con los principios

de respeto a los derechos humanos que deben regir para las policías y fuerzas de seguridad, dejando brechas en la protección de derechos fundamentales.

Por otra parte, desde un punto de vista de la técnica legislativa en la propuesta, la idea de incluir la creación de una Policía Fronteriza en un artículo transitorio de la nueva constitución plantea varios inconvenientes. Los artículos transitorios, por naturaleza, están diseñados para resolver situaciones temporales o de transición, no para establecer instituciones permanentes como una fuerza policial. La constitución, al ser un documento de difícil modificación, limita la flexibilidad necesaria para adaptar esta entidad a cambios futuros. Además, la creación de una policía requiere un alto nivel de detalle y especificación, mejor abordado a través de legislación ordinaria que permita un análisis y debate público más exhaustivos. Incorporar tal medida en la constitución podría politizar excesivamente la institución y no proporciona el espacio necesario para la planificación fiscal y de recursos a largo plazo. En consecuencia, es fundamental que cuestiones tan importantes como la creación de una fuerza de seguridad, como la que se propone, sean tratadas con la debida consideración de la legalidad, neutralidad política y garantías de derechos humanos.

Es crucial destacar la **situación migratoria en la región del Maule** para apoyar nuestros argumentos contra la actual propuesta constitucional sobre migración. En el Maule, una región de notable diversidad migratoria, residen aproximadamente 41.000 extranjeros, la mayoría de ellos venezolanos y haitianos. Este dato no solo habla de la magnitud de la migración en nuestra región, sino también de la necesidad de políticas inclusivas y efectivas. La realidad del proceso de empadronamiento en el Maule ilustra claramente la creciente demanda de regularización migratoria.

Con 9.690 personas inscritas para empadronarse, casi el doble de lo proyectado inicialmente, se evidencia una discrepancia significativa entre las expectativas gubernamentales y la realidad migratoria. Esta situación pone de manifiesto la insuficiencia de nuestras políticas y recursos actuales para abordar adecuadamente las necesidades de la población migrante. Además, el Servicio de Migraciones del Maule, con solo 9 funcionarios, enfrenta una sobrecarga evidente dada la alta demanda de servicios migratorios. Esta limitación en la capacidad administrativa es un claro indicativo de la necesidad urgente de reforzar nuestros sistemas y procesos de migración.

Es fundamental que reevaluemos y mejoremos nuestras políticas y procedimientos migratorios para asegurar que sean justos, eficientes y respetuosos con los derechos humanos, cuestión que la propuesta no considera, especialmente en regiones con alta concentración de migrantes como el Maule.

Propuestas Alternativas

En vista de estos puntos, les cuento como me hubiera gustado una propuesta constitucional que enfrente de forma inteligente la crisis migratoria en nuestro país y en nuestra región:

1. Evaluación Individualizada en Procesos de Expulsión: la propuesta debió haber implementado procedimientos o mandatos explícitos a la ley para que se garanticen evaluaciones individuales y justas en los procesos de expulsión, protegiendo especialmente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y a los solicitantes de asilo y refugiados.

3. Salvaguardas de Derechos Humanos en la Legislación Migratoria: Faltó incorporar disposiciones claras que aseguren la protección de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su estatus legal, en línea con los compromisos internacionales de Chile.

4. Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa: No hay disposiciones expresas para aumentar los recursos y la capacitación para las autoridades migratorias, especialmente en regiones con alta demanda de servicios migratorios como el Maule, para garantizar una gestión eficiente y humanitaria de la migración.

5. Programas de Integración y Participación Ciudadana: Clave hubiera sido desarrollar disposiciones que habiliten programas que promuevan la integración de los migrantes en nuestras comunidades, incluyendo el acceso a la educación, la salud y el empleo, así como facilitar su participación en la vida cívica y política.

6. Enfoque Humanitario en la Seguridad Fronteriza: faltó asegurar que la operación de la Policía Fronteriza y otras entidades relacionadas se realice con un enfoque en la dignidad humana y el respeto a los derechos de todos los individuos, evitando enfoques puramente punitivos o de seguridad excesiva. Quizás hubiera sido más conveniente fortalecer esta función a través de Carabineros y proveerles apoyo logístico que crear nuevas entidades vacías con un puro afán populista.

Para concluir, la propuesta de nueva constitución presentam mcuhas falencias para asegurarnos de que sea eficiente en la solución de la crisis migratoria, justa, efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Por eso, insto a mis colegas y a la ciudadanía a considerar estas críticas. Debemos esforzarnos por una política migratoria que no solo gestione los flujos migratorios, sino que también celebre y apoye la diversidad y la inclusión. Es por estas razones, y en busca de una sociedad más segura, justa y equitativa, que recomiendo votar en contra de la propuesta actual en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

TEMA: FAMILIA

IV. Normas sobre la familia en la Propuesta Constitucional

Artículo 1

2. La **familia** es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las **familias** y propender a su fortalecimiento.

Artículo 12

La Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su **familia**. Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. El Estado reconoce a la **familia**, esto es, los padres o tutores en su caso, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico, todo esto de conformidad con la ley.

Artículo 13

1. La Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la **familia** y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado.

2. El Estado deberá promover la conciliación entre la vida **familiar** y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad.

Artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas:

10. El derecho al respeto y protección de la honra y la de su **familia**.

11. El derecho al respeto y protección de la vida privada y la de su **familia**.

13. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

a) Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos, y a elegir su educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Las **familias** tienen el derecho de instituir proyectos

educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales y religiosas.

23. El derecho a la educación.

b) Las **familias**, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

k) Es deber de la **familia** y la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

24. La libertad de enseñanza.

b) La libertad de enseñanza existe para garantizar a las **familias**, a través de los padres o tutores legales, según sea el caso, el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos; de escoger el tipo de educación; y de enseñarles por sí mismos o de elegir para ellos el establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas. Asimismo, garantiza a toda persona la elección del establecimiento educacional de su preferencia.

26. El derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación.

b) La ley promoverá la conciliación de la vida personal, **familiar** y laboral en el ejercicio del derecho al trabajo decente.

29. El derecho a la vivienda adecuada.

c) El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su **familia**, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse, en forma conjunta, en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su **familia**.

31. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas públicas legales.

b) Los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su **familia** se considerarán deducibles para la determinación de los tributos que correspondan.

Artículo 37

7. Toda persona, institución o grupo debe velar por el respeto de la dignidad de los niños y de los adultos mayores. La **familia** tiene el deber de cuidado de todos sus miembros. El Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza.

V. Análisis

1. Vaguedad en la Definición de Familia y sus Implicaciones. (Artículo 1 N°2)

A pesar de reconocer a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, la propuesta constitucional no proporciona una definición clara y concreta de 'familia'. Esto puede llevar a interpretaciones arbitrarias o restrictivas que podrían excluir ciertas formas de familia, contraviniendo principios de igualdad y no discriminación.

La falta de claridad podría socavar el principio de igualdad y no discriminación, esencial en los derechos humanos, especialmente en relación con las familias no tradicionales o no convencionales.

2. Protección Insuficiente para los Niños en Contextos Familiares Diversos (Artículo 12)

La derecha se negó a reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se desfiguró el interés superior de los niños, ya que está sujeto a la determinación prioritaria de los padres (o tutores), lo que pone en riesgo la situación de miles de niños que se encuentran totalmente desprotegidos en sus familias de origen o que están en una situación de abandono. Se desconocen las distintas realidades que viven los niños en Chile, y omite a quienes más necesitan apoyo del Estado.

3. Cuidados (Artículo 13 N°1)

En nuestro país, son las familias las que se ocupan del cuidado de personas dependientes (ancianos, niños, enfermos), y, dentro de estas, las labores las asumen mayoritariamente las mujeres. En Chile, el 70% de las personas con algún grado de dependencia son cuidadas por una mujer [ENADE 2022], y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados representa el 25,6% del PIB según datos del Banco Central en 2020.

Existen contundentes cifras que demuestran la feminización en los cuidados y sus efectos en el desarrollo integral de las mujeres (pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo, dependencia económica y su correlato con la violencia de género), lo que constituye una preocupación para Chile y Latinoamérica.

Este texto solo recoge la promoción del Estado en esta materia. Lo que realmente se requiere es que el Estado asuma como un nuevo pilar de seguridad social un sistema de cuidados que asegure la corresponsabilidad entre las familias, la sociedad y el Estado en su conjunto, y no perpetuar la idea de que los cuidados es algo privado y que son los cuidadores a través de sus propios medios y subsecuentes sacrificios personales los que deben asumir esta enorme tarea.

El cuidado sin Estado es desigualdad socioeconómica, aislamiento y soledad.

4. Conciliación de la Vida Familiar y Laboral y la protección a la crianza, paternidad y maternidad (Artículo 13 N°2) (Artículo 16 N° 26 letra b) (Artículo 37)

La conciliación entre la vida familiar y laboral, así como la protección de la crianza, la paternidad y la maternidad, son aspectos fundamentales para el desarrollo integral de las personas y la construcción de una sociedad equitativa. En este contexto, el papel del Estado adquiere una relevancia crucial, ya que es el encargado de establecer marcos legales y políticas públicas que salvaguarden estos derechos fundamentales, por lo que resulta sumamente insuficiente el texto propuesto que reconoce el deber del Estado de “promover” la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad, además de “ofrecer” mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza.

La importancia de que el Estado intervenga en la conciliación de la vida familiar y laboral radica en su capacidad para crear un entorno propicio que permita a los individuos cumplir con sus responsabilidades familiares sin tener que sacrificar sus oportunidades laborales. Diversas constituciones alrededor del mundo reconocen y garantizan estos derechos. Por ejemplo, la Constitución de Suecia establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo condiciones que permitan a ambos géneros participar activamente en la vida laboral y familiar.

En materia de protección de la crianza, la paternidad y la maternidad, “ofrecer” mecanismos de apoyo son contrarios a la idea de “asegurar” que existan políticas y servicios que respalden a los padres en el cuidado y educación de sus hijos. La maternidad, tanto a nivel nacional como internacional, goza de una protección legal que reconoce una serie de derechos inherentes a la condición de madre, ya que esta trasciende el interés individual de la trabajadora, siendo reconocida como un derecho humano fundamental respaldado por tratados internacionales y nuestra legislación nacional, que se vería sumamente desprotegida con la redacción propuesta.

5. Objeción de conciencia (Artículo 16 N° 13.) Derecho a la educación (Artículo 16 N° 23 letras b) y K). Libertad de enseñanza (Artículo 16 N° 24)

Objeción de conciencia, no existe otra regulación similar en el mundo, al menos no con una libertad de conciencia y religión tan sobrecargada (el ejemplo es Portugal, donde existe una norma parecida, pero con una cláusula general poco densa en materia de libertad de conciencia y religión). Donde existe está limitada al servicio militar obligatorio (ej. Alemania) o como forma de eximirse del cumplimiento de trabajos forzados a los que una persona haya sido condenada (países africanos).

Se podría permitir que un colegio discrimine o expulse a hijos de padres separados, o jóvenes embarazadas, o trans, o farmacias vender la píldora del día después, en miles de posibilidades más.

Hoy la derecha abre una puerta hacia la impunidad de la violencia física, sexual y emocional, así como el abandono y la explotación de NNA. En familias en donde la violencia familiar es un cotidiano ¿Quién protegerá a los infantes a los cuales se les ha negado su derecho? 9% de los niños/as reporta haber sufrido agresiones sexuales de su familia.

6. Tributos (Artículo 16 N°31 letra b)

Hay otra cosa muy peligrosa, que es la que dice sobre deducir impuestos a los gastos necesarios para la vida, cuidado y desarrollo de la persona y su familia. Eso generará una judicialización de los impuestos que tomará años en resolver. Le pone una traba a los temas fiscales que son extremadamente peligroso.

7. Inembargabilidad de los fondos previsionales (Artículo 16 N° 28 letra b)

A propósito de la norma que se refiere a los fondos previsionales, podría solicitarse la declaración de inconstitucionalidad de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos “Papito Corazón”, ya que implica la retención judicial de fondos previsionales por parte del Estado (tribunales) ante incumplimiento de deberes alimentarios y el proyecto constitucional establece que, “En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno.”

VI. Datos

Registro Nacional de Pensiones de Alimentos

Registro vigente por Corte de Apelaciones: C.C Talca 21.312

Solicitud de inscripción: Región del Maule es la 4° a nivel Nacional

Juzgado Familia talca es el 3° a nivel nacional con 4.151

Alimentarios: 13.996

Monto adeudado en pesos: 14.546.723.425

Instituto Nacional de Estadísticas. INE

Porcentaje jefas de hogar, Censo 2017 Region del Maule:

Promedio cercano el 35% (34.9%) llegando al 40.4% en Curicó; 42.8% Talca; 41.3% San Javier; 42.4% Linares.

Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021:

El 50% de las mujeres ocupadas percibieron un ingreso mensual menor o igual a \$379.500

TEMA: CORRUPCIÓN

En materia de corrupción, la propuesta constitucional supuestamente se preocupa del tema de la corrupción, pero como en otros casos, lo que en verdad hace es juntar declaraciones moralistas cuya concreción jurídica van a resultar derechamente contraproducentes y perjudiciales.

DEBER DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN. Por ejemplo, la Constitución actual tiene un capítulo donde van los derechos y “deberes” constitucionales. Lo que de por sí ya es extraño, porque la idea liberal clásica de una Constitución es limitar el poder estatal a través de derechos de los ciudadanos, y no imponerle deberes. Pues bien, en la propuesta constitucional hay un capítulo específico de “Deberes Constitucionales” y en el artículo 37 señala literalmente: “Combatir la corrupción es un deber de todos los habitantes de la República”.

Suena muy bien, pero basta analizar someramente el texto para ver los problemas. El uso del verbo “combatir” requiere de una conducta positiva, no basta solamente con no involucrarse en actos de corrupción ¿Quiere decir esto que todos los habitantes de la República, no sólo los funcionarios públicos, deben estar buscando a personas corruptas? ¿Quiere decir que, al igual que los funcionarios públicos, los particulares -ustedes sentados ahí- estarán obligados a denunciar cualquier acto de corrupción que presencien porque si no lo hacen cometen un delito? ¿Será necesario que lo presencien o también deberemos denunciar los testimonios de oídas y rumores que nos lleguen?

Como se ve es una norma difícilmente practicable y, de cumplirse, le encarga a los ciudadanos andar convirtiéndose en delatores de todo el mundo.

Y ojo, no es que no crea que se debe combatir la corrupción de manera abierta y clara. De hecho, en el caso Convenios yo misma presenté un proyecto en el Senado que crea una ley marco de medidas de probidad, transparencia y rendición de cuentas respecto a todo tipo de subvenciones y transferencias que hace el Estado.

Pero para combatir la corrupción se requiere institucionalidad, no traspasarle el problema a los particulares.

AGENCIA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. Lo peor es que la propuesta constitucional también intenta crear institucionalidad contra la corrupción, y falla.

El artículo 8 de la propuesta crea una Agencia Nacional contra la Corrupción para “COORDINAR” las entidades estatales que tengan funciones en materia de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. La propuesta no dice nada más al respecto y deja a la ley la composición y funciones de esta Agencia.

Aparte de lo defectuosa de la redacción, pareciera que los autores de esta idea no se dan cuenta que les faltó llenar un vacío esencial: qué instituciones con autonomía constitucional deberán ser coordinadas. No se le puede dejar a la ley la función de esta agencia de coordinar, por ejemplo, a la Contraloría General de la República o al Servicio Electoral -ambos con funciones en materia de rendición de cuentas-, porque su autonomía está asegurada constitucionalmente y, por ende, una ley no puede ordenarles ser coordinados por esta nueva Agencia.

Entonces, con lo que nos encontramos nuevamente es con textos que tienen buenos titulares, pero que en la bajada no dicen nada relevante. Funcionan como consignas útiles para una campaña, pero que si uno piensa en su aplicación jurídica o son demasiado limitadas o derechamente impracticables por las fallas técnicas en su redacción.

¿CUAL ES LA SOLUCIÓN PARA LA CORRUPCIÓN? La única solución real para la corrupción es que tengamos organismos capaces de investigar de verdad estos casos, facultades intrusivas modernas y policías preparadas. Para eso estamos trabajando donde corresponde, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, 1) un proyecto de ley de inteligencia financiera que fortalece la colaboración entre el Ministerio Público, la UAF y el SII para seguir la plata que detrás de los delincuentes; 2) se publicó como ley este año una modificación relevante al Código Penal y Procesal Penal para hacer frente al crimen organizado y 3) vamos a comenzar a discutir un proyecto de ley sobre especialización de las policías, ya que actualmente se requiere que la PDI sea experta en ciberseguridad, ingeniería de datos, contabilidad, economía y ese tipo de materias para hacerse cargo de la corrupción real.

A blue-tinted background image showing riot police in Chile. The police are wearing helmets, carrying shields, and some are holding batons. They appear to be in a crowd or on a street. The image is semi-transparent, allowing the text to be overlaid.

PRESENTACIÓN ANTE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA SENADO DE CHILE

06 de noviembre de 2023

Boletín N° 16.224-25 “Deroga la ley 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una Nueva Ley Antiterrorista”

- 1) ¿Cuál es la perspectiva más apropiada para aproximarse a una legislación sobre el terrorismo?**
- 2) ¿Cómo la realidad nacional debiera afectar la formulación de esta nueva legislación?**
- 3) ¿Qué nuevo puede aportar esta legislación al combate contra al terrorismo?**
- 4) Aspectos varios.**

infobae

México Últimas Noticias Política Deportes Entretenimiento Leamos Newsletters

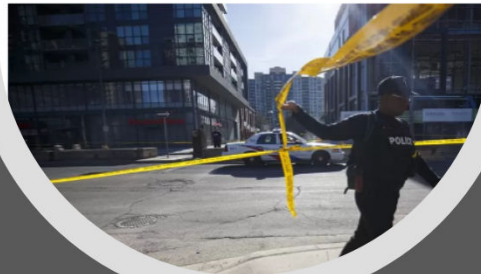
MÉXICO >

Las diferencias entre narcos y terroristas impiden ponerlos en la misma cueta, según expertos

El gobierno presentó un proyecto de ley para designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, un movimiento de que contribuyen directamente a la crisis

Prism ruling in Canada 'incel' attack

June
Toronto van attack



INTERNATIONAL - SWEDEN

Brussels attacks: Why is Sweden being threatened by terrorists?

Two football fans – a Swede and a Swiss-Swedish citizen – were killed in a terrorist attack in Brussels on Monday. Sweden has received threats after a series of Quran burnings on its soil.

Le Monde

Published on October 17, 2023, at 3:11 pm (Paris) - 2 min. - Lire en français



FATF REPORT

Money Laundering Terrorist Financing Arising from Migrant Smuggling

March 2022

TERRORISMO ES UN FENÓMENO:

- SIN FRONTERAS
- CON MÚLTIPLES MANIFESTACIONES
- VINCULADO A OTROS DELITOS



Tunisian citizen
crashed into
Christmas market
in Berlin.

TERRORISM/COUNTER TERRORISM

Aftermath of the Terror Attack on
Breitscheid Platz Christmas Market:
Germany's Security Architecture and
Parliamentary Inquiries

Sebastian von Münchow

July 2017, Number 028

PRIMER PREGUNTA ¿Cuál es la perspectiva más apropiada para aproximarse a una legislación sobre el terrorismo?

IMPORTANCIA DE SEPARAR PERSPECTIVA INTERNACIONAL/NACIONAL PARA LA LEY CHILENA



- Carta de las Naciones Unidas dispone que decisiones del Consejo de Seguridad (CS) son obligatorias para miembros ONU.
- Resolución 1566 (2004) del CS, en que Chile formaba parte:
 - *Insta* a todos los estados a sancionar con penas graves los actos criminales contra civiles con **intención de causar muerte, lesiones graves o tomar rehenes** para producir **terror en la población, en un grupo o en determinada persona**, o para **obligar a un gobierno u organismo internacional** a realizar o abstenerse de un acto.
 - *Insta* a hacerse parte, con carácter urgente, de **tratados y protocolos internacionales** relativos a la lucha contra el terrorismo.



- Asamblea General aprueba **ESTRATEGIA GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TERRORISMO (8 de septiembre de 2006)** y Estados se comprometen:
 - Tipificar, de acuerdo a obligaciones de derecho internacional, delitos de financiamiento, planificación, preparación, apoyo y comisión de actos terroristas.
 - Hacerse parte a la brevedad de convenios y protocolos internacionales existentes de lucha contra el terrorismo.

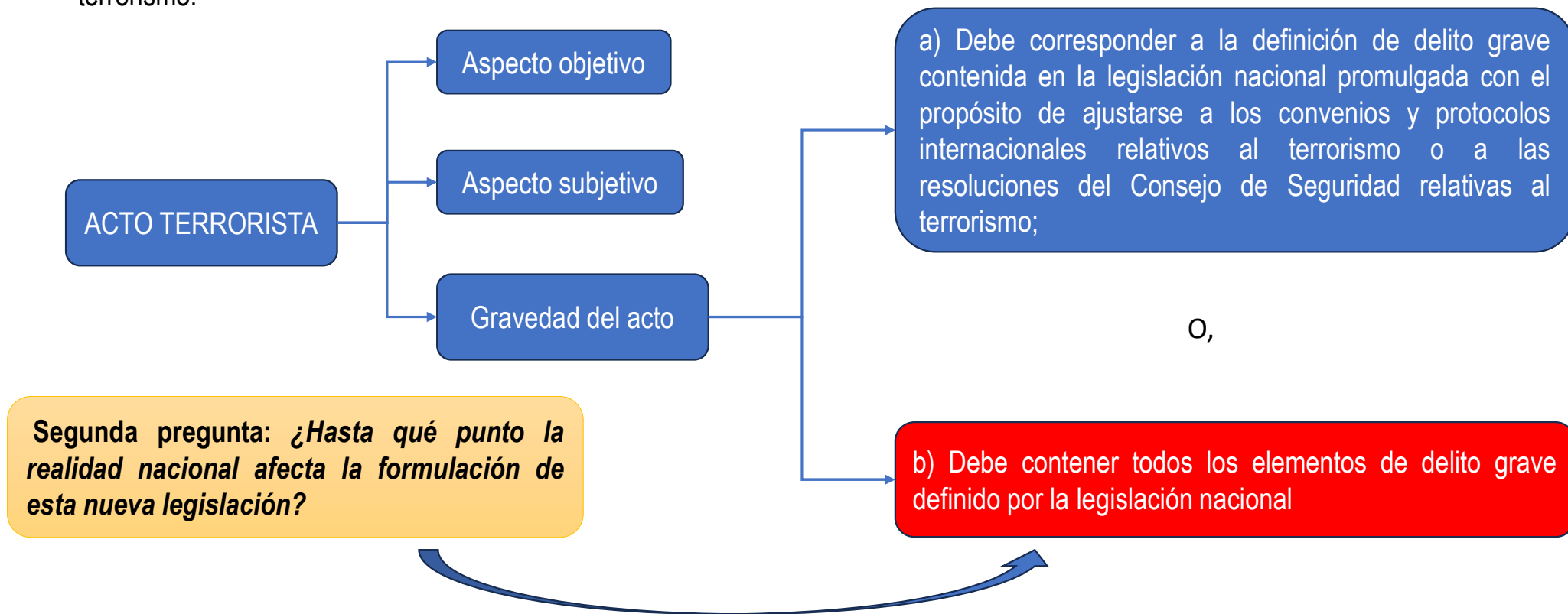
¿Cuáles instrumentos internacionales son considerados como parte de la lucha contra el terrorismo?

Instrumentos sobre atentados contra aviación civil y navegación marítima		Atentados contra personas	Uso de medios estragosos	Financiamiento
Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (1963)	Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (1988)	Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los Agentes Diplomáticos (1973)	Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980)	Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970)	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988)	Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979)	Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección (1991)	
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (1971)	Protocolo al Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental (2005)		Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997)	
Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988)	Protocolo complementario del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (2010)		Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (2005)	
Protocolo del Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (2014)	Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional (2010)		Enmienda a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (2005)	

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO: Art. 3. Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por **ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2** de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.

De acuerdo al derecho internacional ¿sólo se pueden considerar terroristas los actos tipificados en los convenios mencionados?

NO. La mejor prueba es la definición modelo hecha el 2010 por quien fuera el **Relator Especial de las Naciones Unidas** (A/HRC/16/51) sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo:



¿Cómo se hace cargo de esta perspectiva internacional y nacional el proyecto de ley?

Separando delitos que debemos tipificar por convenios internacionales, de la discusión nacional:

ASPECTO INTERNACIONAL: DELITOS “CONVENCIONALES”

Delitos contemplados en el proyecto de ley por conv. internacional	Fuente de Derecho Internacional
Artículo 1°. Atentados contra la aviación civil, la navegación marítima y las plataformas fijas en el fondo marino.	Arts. 1° y 2° Convención de Aeronavegación de 1970, Proyecto 2010; Arts. 2° y 3° Convención Marítima de 1988, 3° bis Protocolo de 2005 y 2° bis Protocolo sobre Plataformas Marítimas
Artículo 2°. Atentados contra personas protegidas internacionalmente	Art. 2, Convención de Agentes Diplomáticos de 1973
Artículo 3°. Toma de rehenes	Art. 1, Convención contra la toma de rehenes de 1979
Artículo 4°. Atentados con bombas explosivas y otros artefactos letales	Arts. 5 y 10 Convención relativa a las bombas, de 1997
Artículo 5°. Tráfico de armas y tecnología de destrucción masiva	Art. 1 Convención sobre Terrorismo Nuclear 2005 y Convención de 1980 sobre Protección de Materiales de armas de destrucción masiva
Artículo 7°. Financiamiento del terrorismo	Art. 2 Convención de 1999 sobre Financiamiento del Terrorismo
Artículo 8°. Apología y facilitación del terrorismo	Resolución 1624 (2005) Consejo de Seguridad ONU, N° 1.a.

Nota metodológica respecto a redacción empleada en los tipos penales:

1. Informe prof. Jean Pierre Matus a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado (11.11.2014) en boletín N° 9.692-07.
2. Guía de la ONU para incorporación legislativa de instrumentos internacionales contra el terrorismo (): “se recomienda a los redactores de leyes **que incorporen o transcriban las disposiciones de los instrumentos universales**” (p. 5)
3. Canadá (Criminal Code art. 83.01) y Francia (Code Pénal, art. 421-1) siguen la misma estructura.

 NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN
LEGISLATIVA Y LA APLICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS UNIVERSALES
CONTRA EL TERRORISMO

¿Cómo se hace cargo de esta perspectiva internacional y nacional el proyecto de ley?

ASPECTO NACIONAL: DELITO RESIDUAL

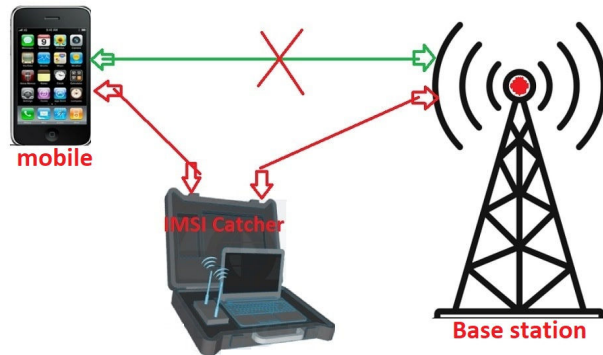
Aspecto objetivo (descripción típica)
Secuestro (art. 141)
Sustracción de menores (art. 142)
Tortura (art. 150 A)
Envenenamiento masivo (art. 315)
Diseminación de gérmenes (art. 316)
Homicidio (art. 391)
Castración (art. 395)
Mutilación (art. 396)
Lesiones graves (arts. 397 y 398)
Incendio con resultado de muerte o lesión grave (art. 474)
Incendio en lugar habitado (art. 475)
Incendio en inmueble o vehículo deshabitado, bosque nativo o área silvestre (art. 476)
Delito de estrago (art. 480)
Delitos informáticos (ley Nº 21.459)

Aspecto subjetivo (intención de...)
a) socavar, desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales del orden institucional democrático;
b) <i>alterar gravemente el orden público;</i>
c) imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad política o a una organización internacional;
d) infundir temor generalizado en la población o en una parte de ésta de pérdida o privación de derechos fundamentales; o,
e) <i>inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica a que se refiere el artículo 32, N° 21, de la Constitución Política de la República o a aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto grave en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado.</i>

TERCERA PREGUNTA ¿Qué nuevo puede aportar esta legislación al combate contra al terrorismo? INNOVACIONES EN DILIGENCIAS PROCESALES

- Ley N° 21.575 (23.05.2023) introdujo al CPP diligencias especiales de investigación aplicables a la criminalidad organizada.
- Sin embargo, tecnología actual permite otras medidas no contempladas en la legislación:

Artículo 20. Intervención de redes de servicios de telefonía y de transmisión de datos móviles.



No es lo mismo que interceptación de comunicaciones de art. 222 CPP: no requiere intervención de concesionaria y afecta un área.

Artículo 21. Activación remota de dispositivos electrónicos.

Le Sénat donne son feu vert à l'activation à distance des caméras ou micros des téléphones

L'article 3 du projet de loi du garde des Sceaux est controversé et cristallise les inquiétudes de la gauche et d'associations.

franceinfo avec AFP
France Télévisions

Publié le 08/06/2023 07:02

© Temps de lecture : 1 min



Des sénateurs au palais du Luxembourg, le 31 mai 2023 à Paris. (JOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP)

Ley aprobada en octubre 2023 y actualmente en control preventivo de constitucionalidad.

ASPECTOS VARIOS

Guía legislativa ONU

- **¿Modificación a Códigos o ley independiente?**

— bien mediante la reforma de la parte especial del Código penal del Estado miembro (opción especialmente aconsejable para aquellos Estados que tienen la intención de reformar su Código penal o que ya están en proceso de reformarlo. Ello implica, inevitablemente, una necesaria coordinación entre la parte especial y la parte general del Código, además de la reforma de otros textos tales como el Código de procedimiento penal);

— bien mediante la aprobación de una ley autónoma que contenga todos los elementos requeridos por los convenios y convenciones (esta solución es, técnicamente, la más rápida y sencilla).

- **Informe de Corte Suprema:** amplias finalidades terroristas (proyecto Pdta. Bachelet, ley española y Directiva EU), facilidad para emplear medidas especiales de investigación y sistema estricto de penas (menor espacio al juez) son decisiones expresas de los autores y se consideran proporcionales.
- **Otros elementos que puede contener la legislación terrorista:**
 - Estrategia Nacional contra el Terrorismo: documento de planificación y asignación expresa de responsabilidades.
 - Mecanismos de reparación a víctimas.
 - Mecanismos de intercambio de información entre Estados respecto a traslado aéreo/marítimo de personas dedicadas al “extremismo violento”. (Res. 2178/2014 CS ONU)
 - Penalización de viajes para proporcionar o recibir adiestramiento terrorista (Res. 1373/2001 CS ONU)
 - Revisión o denegación de condición de asilado o refugiado (Res. 1624/2005 CS ONU)
 - Cooperadores eficaces o informantes pagados efectivamente y no solo “la provisión de los recursos económicos suficientes para facilitar la reinserción del sujeto” art. 34, ley 20.000)